



A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente **Moción consecuencia de interpelación urgente al ministro del Interior, sobre los ataques que está sufriendo la Guardia Civil de manos de, entre otros, miembros de su Gobierno.**

Madrid, 12 de junio de 2025

Fdo.: Miguel TELLADO FILGUEIRA
PORTAVOZ

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan como garantes de la seguridad ciudadana y de la protección de los derechos y de las libertades individuales y colectivas. Entre ellos, merece especial reconocimiento la Guardia Civil, institución centenaria compuesta por agentes dotados de una gran profesionalidad, vocación de servicio público y comprometidos con la legalidad y el Estado de Derecho.

La Benemérita es un baluarte de los principios constitucionales. Su entrega a la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la violencia de género, la trata de seres humanos, los delitos medioambientales y la corrupción merecen el máximo respeto y reconocimiento de la ciudadana y, por ende, de sus representantes públicos.

Especial mención merece la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuya labor investigadora ha permitido desarticular complejas redes delictivas y poner ante la justicia a quienes han antepuesto sus intereses personales y económicos al cumplimiento de la ley.

Pues, resulta especialmente preocupante y grave constatar los recientes intentos de desacreditar y presionar a esta unidad, por parte de miembros del propio Gobierno, de personas del círculo más cercano del presidente Sánchez y de la dirección del PSOE, todos ellos interesados en frenar investigaciones por diversos delitos que les afectan directamente.

En este contexto, cabe recordar que la UCO mantiene abiertas varias investigaciones en materia de anticorrupción que afectan al que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por supuestas adjudicaciones irregulares y 'mordidas' de dinero público en el marco de la denominada *trama Koldo*, en la que tanto Ábalos como su exasesor y persona de máxima confianza, Koldo García, están imputados por delitos de cohecho, organización criminal, malversación y tráfico de influencias.

También las investigaciones afectan al entorno familiar más próximo del presidente del Gobierno, incluyendo la presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz de David Sánchez, hermano del presidente, así como indagaciones sobre la actividad profesional de Begoña Gómez, esposa del presidente.

En ese sentido, son especialmente graves las operaciones lideradas por una militante del Partido Socialista y ex alto cargo del Gobierno, Leire Díez, conocida como la “fontanera del PSOE”, quien, según se ha podido constatar en las grabaciones difundidas por varios medios de comunicación, participó en una trama coordinada para desacreditar a los investigadores policiales y judiciales implicados en todos estos casos de corrupción que afectan a su propio partido.

Según las informaciones publicadas, la trama organizada desde el entorno del PSOE, que encabezaba Leire Díez, habría recabado información contra altos mandos de la UCO, jueces y fiscales que trabajan en las causas de corrupción que afectan al Gobierno. Pues, una de sus funciones era, al parecer, obtener y distribuir materiales audiovisuales manipulados para coaccionar a los investigadores.

Leire Díez, quien se ha presentado como “periodista”, actuando en nombre del PSOE, mantuvo reuniones grabadas con empresarios investigados en las que ofrecía “soluciones judiciales”, proponía el cese de mandos de la UCO, y mencionaba contactos directos con miembros del Gobierno y con el actual secretario de Organización del PSOE.

Todo ello constituye una clara intromisión en la independencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, vulnerando el principio de separación de poderes y debilitando el funcionamiento normal del Estado.

Estas maniobras no sólo suponen una tentativa de obstrucción a la justicia, sino que constituyen un ataque sin precedentes a la profesionalidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado, con la finalidad evidente de proteger intereses personales y partidistas.

Y estas maniobras han estado, además, claramente coordinadas con la actuación del Grupo Socialista en el Congreso en la Comisión de Investigación sobre la denominada "Operación Cataluña", con coincidencias expresas en los objetivos señalados y en los materiales utilizados.

En este intento para desacreditar a la UCO, con el supuesto fin último de acabar con el jefe de Delincuencia Económica y la desarticulación de la propia unidad, ni la directora de la Guardia Civil ni el ministro del Interior han defendido la labor del Cuerpo en unas investigaciones que han sido avaladas judicialmente, que han seguido los cauces legales establecidos, y que han sido reconocidas por la Audiencia Nacional por su rigor, proporcionalidad y respeto a los derechos de los investigados.

En ningún momento se ha constatado irregularidad alguna en las actuaciones de la UCO. Al contrario, su labor ha sido fundamental para desentrañar la presunta red de corrupción que compromete gravemente al Gobierno y al entorno familiar de Pedro Sánchez.

En lugar de asumir con transparencia política y responsabilidad institucional la gravedad de estas investigaciones, diversos miembros del Ejecutivo y del Partido Socialista han emprendido una ofensiva mediática y política contra la Guardia Civil, particularmente contra su unidad investigadora más prestigiosa y eficaz: la UCO: desde la puesta en duda de la calidad de sus informes hasta la acusación directa de filtraciones, pasando por extender un bulo sobre un falso intento de atentado de un ex agente de esta unidad contra el presidente del Gobierno.

Hoy mismo hemos conocido por los medios de comunicación que la propia UCO atribuye a la dirección de Ferraz, encabezada por su secretario de Organización Santos Cerdán, el desarrollo de una "organización criminal" que buscaba recibir pagos millonarios a cambio de la concesión de obra pública.

La gravedad de estos hechos es enorme. Especialmente teniendo en cuenta la necesaria complicidad de altos cargos del Gobierno para que dichas contraprestaciones se efectuasen. Es imperativo que el presidente del Gobierno dé explicaciones inmediatas y completas sobre toda la corrupción que lleva años sucediendo a su alrededor.

Estos hechos delictivos investigados por la Guardia Civil son la gota que colma el vaso de la enorme degradación institucional y democrática que ha sufrido España en los últimos años a manos del Gobierno de Pedro Sánchez.

«Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Reconocer la labor y profesionalidad de la Guardia Civil, en especial de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y garantizar la independencia de sus investigaciones.
2. Detener los ataques e insinuaciones sobre la Guardia Civil por parte de altos cargos y miembros del Gobierno y exigir la rectificación, con expresa petición de disculpas, a aquellos que difundieron informaciones falsas de contenido gravemente difamatorio contra miembros de la Guardia Civil.
3. Instar al presidente del Gobierno a dé explicaciones urgentes y asuma su responsabilidad, en relación con las diferentes tramas de corrupción destapadas por la UCO. En especial por la relación de Presidencia del Gobierno con la presunta “organización criminal” que desde la dirección del PSOE gestionaba pagos a cambio de la concesión de obra pública y preparaba ataques desde las cloacas contra jueces, periodistas y Guardias Civiles».